



Revista de Ciencias Sociales (Ve)
ISSN: 1315-9518
cclemenz@luz.ve
Universidad del Zulia
Venezuela

García, José Guillermo
Iglesia y participación comunitaria en salud: el caso del Municipio San Francisco del estado Zulia,
Venezuela
Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. VIII, núm. 1, enero -abril, 2002, pp. 75-94
Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28080106>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

Iglesia y participación comunitaria en salud: El caso del Municipio San Francisco del estado Zulia, Venezuela

García, José Guillermo*
Sarcos, Keila**

Resumen

Este trabajo tiene por objeto identificar en forma comparada los factores que condicionan la participación de las comunidades Betulio González y 24 de Julio del municipio San Francisco del estado Zulia en el subprograma de Medicina Natural que promociona la Iglesia Católica. Bajo un esquema conceptual que combina principios de las teorías: Elección Racional, Movilización de Recursos, Privación Relativa, Identidades Colectivas y Capital Social, se plantea la hipótesis que la participación de dichas comunidades en el subprograma está determinada por una serie de factores internos y externos en donde resaltan la representación social que tienen del subprograma, el cálculo racional de la acción, la tradición participativa y el apoyo organizativo de grupos voluntarios. Se empleó la perspectiva etnomedotológica en la realización de entrevistas en profundidad, de donde se extrajo como conclusión que existen factores comunes que condicionan la participación en ambas comunidades, tales como la reafirmación de una identidad femenina entendida como un incentivo para la acción, una representación colectiva positiva sobre la medicina natural y la presencia de recursos organizativos externos proporcionados por las escuelas ubicadas en cada comunidad, por grupos eclesiales de base y por la misma Iglesia Católica como agente promotor del subprograma.

Palabras clave: Iglesia, participación, salud, política social, comunidad eclesial de base.

The Church and Community Participation in Health: The Case of Sanfrancisco Municipality, Zulia State, Venezuela

Abstract

The objective of this paper is to compare factors that conditioned the participation of the Betulio Gonzalez and 24th of July communities located in the San Francisco Municipality of Zulia

Recibido: 01-04-02 . Aceptado: 01-10-31

* Sociólogo. Profesor de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela de Gobierno del Estado Zulia (IZEPES). Director de la Revista "Ciencias de Gobierno". Maracaibo-Venezuela. E-mail: jggch@icqmail.com

** Licenciada en Trabajo Social. Departamento de Desarrollo Social de CORPOZULIA.

State in the Natural Medicine program promoted by the Catholic Church. Under a conceptual framework combining the theoretical principles of: rational election, resource mobilization, relative privacy, collective identity, and social capital, the hypothesis as to the participation of the above mentioned communities in this program is thought to be determined by a series of internal and external factors such as the social representation of the program, the rational aspect of the activity, a participatory tradition, and the support of volunteer organizational groups. A etnomethodological perspective in the realization of in-depth interviews was employed, from which the conclusion is that there are common factors that condition participation in both communities such as the reaffirmation of feminine identity understood as an incentive for action, a positive collective representation of natural medicine, and the presence of external organizational resources offered by the schools located in each community, by ecclesiastic groups, and by the Catholic Church as a promotional agency for the program.

Key words: Church, participation, health, social policy, ecclesial based community.

Introducción

En Venezuela, a partir de la década de los noventa y como consecuencia de los programas de ajustes hacia el mercado, el espacio abandonado por el Estado en términos de sus funciones sociales básicas como educación, salud y vivienda ha venido siendo ocupado por un conjunto de organizaciones nuevas y preexistentes de la sociedad civil, las cuales adoptando un discurso sustentado en la autogestión se han planteado que sean las mismas comunidades quienes asuman en sus manos la solución de los problemas. Una de estas organizaciones es la Iglesia Católica, quien ha ganado en los últimos años una mayor presencia en el ámbito público por el desarrollo de una política social propia y como promotora de la participación social en la ejecución de sus programas sociales.

En el Estado Zulia, a través del Secretariado de Pastoral Social (SEPAS) de la Arquidiócesis de Maracaibo, la Iglesia lleva adelante una serie de programas sociales, donde destaca el Programa de Salud Comunitaria, que se adelanta en el municipio San Francisco, donde se

encuentran ubicadas dos comunidades pobres que llevan por nombres Betilio González y 24 de Julio, y en donde la Iglesia trata de involucrar a los habitantes de ambas comunidades en la ejecución del subprograma con el propósito de crear una esquema autogestionario de salud alternativa mediante la participación activa de los vecinos, con lo cual se evidencia que el radio de acción de la Pastoral Social rebasa los límites del municipio para atender otras necesidades de salud en el estado (1).

El objetivo de este trabajo es identificar en forma comparada los factores que condicionan la participación de los habitantes de las comunidades Betilio González y 24 de Julio en el subprograma de Medicina Natural. Para ello, se plantea una estrategia comparativa sobre la base de elementos comunes a ambas comunidades que se expresan en una serie de categorías relacionadas al nivel de instrucción de los participantes, su profesión u oficio, creencias religiosas, conocimiento del subprograma, tipo y nivel de actividad de grupos eclesiales de base en la comunidad, entre otras.

Se maneja la hipótesis general que la participación comunitaria obedece a un entra-

mado de factores internos y externos al grupo, tales como el cálculo anticipado de los beneficios que reporta la acción; la existencia de identidades colectivas sólidas que proyecten una representación social positiva acerca de la participación y construyan consenso en torno a las necesidades del grupo; la trayectoria participativa previa de la comunidad, vista como un capital social acumulado; y la presencia de actores exógenos que den soporte organizativo a la participación, fomentándola a través del uso de incentivos de carácter material o simbólico.

Mediante el uso de una metodología de tipo cualitativa, se realizaron entrevistas en profundidad tanto a miembros que ejecutan el subprograma de Medicina Natural pertenecientes a la Iglesia Católica así como a habitantes de ambas comunidades a fin de registrar la presencia o ausencia de los factores mencionados y la incidencia que ello tiene sobre el nivel de participación de los vecinos en la ejecución de dicho subprograma.

Evitando caer en posiciones deterministas de la participación de tipo racionalistas y culturalistas se propone combinar principios pertenecientes a ambas vertientes, no como visiones antagónicas sino más bien en la búsqueda de un lugar de encuentro donde se hagan presente los diversos planteamientos que tratan de explicar el fenómeno de la participación social y el papel que puede estar jugando la Iglesia católica como variable influyente en dicho fenómeno.

1. La Iglesia: una empresa de la participación social

La percepción de la sociedad venezolana sobre la Iglesia Católica como actor representativo de los intereses generales de la población, y más específicamente en la defensa

de los sectores de escasos recursos es una de las identificaciones simbólicas más claras del imaginario colectivo, erigiéndola como un ente con gran confianza social en momentos de grave deterioro institucional. Según estudios de valores (Zapata, 1996: 127), la Iglesia venezolana ha contado con niveles de aceptación muy superiores a instituciones de reconocido prestigio como las universidades, los medios de comunicación y las fuerzas armadas, situación poco común y nada frecuente en otras partes del mundo.

Como se ha mencionado en un trabajo anterior (García, 1999), gran parte de la credibilidad alcanzada por la Iglesia Católica se ha debido a la proyección del recurso comunicativo de un tipo de discurso sustentado sobre los principios de la moral y la ética, que vuelve la atención de la gente hacia esta institución en momentos de enorme descrédito de muchas organizaciones públicas y privadas, en vista de la corrupción, de su actitud predadora ante lo colectivo, su irresponsabilidad frente a la ciudadanía y su poca sensibilidad social.

Por otra parte, en las décadas que van de democracia, la estructura organizativa establecida por la Iglesia católica con el propósito de la evangelizar se ha ido especializando para estar más directamente en contacto con algunos sectores de la sociedad, concretando así la propuesta de la llamada *Iglesia Local* (Trigo, 1997). Ello se ha manifestado, en un “dinamismo creciente, tanto a nivel institucional (creación de diócesis y parroquias y lanzamiento a los barrios) como a nivel de movimientos (cursillos de cristiandad, Mundo Mejor, Legión de María, cursos de capacitación social y multitud de grupos juveniles)” (Trigo, 1997: 572).

Mediante la creación de grupos parroquiales voluntarios se ha venido incorporando a gente joven en la realización de actividades

culturales y de beneficencia que llevan implícito el discurso socializador de lo cristiano, lo cual tiene también como fin -a través del ingreso de nuevas generaciones de feligreses- asegurar el futuro de la Iglesia católica en un contexto de alta y competitiva oferta religiosa.

Vemos así, como a partir de estos recursos prácticos, simbólicos, comunicativos y organizativos la Iglesia Católica se erige como un actor con altas potencialidades para la movilización colectiva y, por ende, para el logro de la participación de la comunidad en la esfera de lo público, organizándola en torno a objetivos relacionados a las necesidades de los miembros del grupo social. En este sentido, dicha institución puede reconocerse como una empresa de la participación desde una perspectiva que reúne los planteamientos de las teorías de la Elección Racional y de la Movilización de Recursos, las cuales tratan de explicar el comportamiento colectivo. Examinemos por un momento tales teorías.

1.1. La racionalidad de la participación social: los incentivos selectivos

El interés por explicar el comportamiento social del individuo ha estado presente desde el marxismo que se lo atribuye a razones supraindividuales como las clases sociales, hasta el funcionalismo que le concede un lugar determinante a la estructura social como factor que provee los recursos necesarios para la acción. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX desde el campo de la economía surgió un teorema que ha tratado de explicar la acción social sobre la base de un cálculo racional de la relación coste-beneficio que pueden realizar los individuos frente a situaciones que exigen una toma de decisión. Dicha tesis que ha venido desarrollándose en las últimas décadas en el ámbito de las Cien-

cias Políticas y que ha adquirido preeminencia a la hora de explicar el comportamiento político y social ha sido conocida como la *teoría de la decisión o de la elección racional*.

La teoría de la elección racional tiene sus raíces en el clásico trabajo de Anthony Downs *La Teoría Económica de la Democracia* (1973), publicado originalmente en 1957, donde plantea que el individuo toma la decisión de por cuál partido político votar a partir del beneficio previsto por anticipado que resulte de esa elección dentro de un conjunto de alternativas políticas. En rigor, la teoría plantea que el sujeto actúa a partir de un cálculo de los beneficios que recibirá por dicha actuación.

Los planteamientos de Downs, sin embargo, están restringidos a una óptica individualista de la acción, en el sentido de que se ajustan para explicar por qué una sola persona actúa, pero no dan cuenta sobre las razones que hacen que un grupo se movilice en una dirección. El identificar puntos de encuentro entre los diferentes mundos de vida de los individuos a fin de explicar por qué estos se embarcan en una acción colectiva que tenga efectos públicos era algo que no estaba presente en la teoría económica del voto y la democracia planteada por Downs.

Una explicación sobre la movilización social en la misma línea del cálculo costo-beneficio la ofrece posteriormente en 1973 Mancur Olson en su libro *La Lógica de la Acción Colectiva* (1992). Para este autor, la gente actúa colectivamente cuando a lo interno del grupo operan los llamados *incentivos selectivos* como condicionantes racionales, ya que los mismos significan recompensas materiales y/o simbólicas privadas y exclusivas para quienes participen. En este sentido, la participación se hace atractiva racionalmente desde el cálculo de cada individuo, ya que además de producir un beneficio social, este

individuo supuestamente si se moviliza recibe por su actuación una utilidad particular, bien sea económica o de prestigio.

La cuestión central que entraña una acción colectiva “es que el beneficio esperado de la acción es público, general (lo reciben también quienes no se movilizan en defensa de sus intereses) mientras los costes son siempre individuales” (Paramio, 2000: 69). Esto introduce el razonamiento sobre la validez de participar colectivamente en términos de la relación coste-beneficio que realizan supuestamente las personas, la cual en este caso resultaría asimétrica desde el plano individual y llevaría racionalmente a la gente a no participar. Por ello, se hacen necesarios los incentivos selectivos como mecanismo que propicie la participación de los miembros del grupo en una acción común.

Paralelamente a esta teoría, otro argumento que ha logrado de nuevo cierto auge para explicar la acción colectiva es el referido al descontento social que produce la frustración de expectativas. En un contexto de profundo malestar de la ciudadanía por las graves crisis económicas, los regresivos efectos de los ajustes de mercado y la reducción de la acción benefactora del Estado ha ganado terreno la tesis de la participación social como fórmula para hacer frente al cuadro de necesidades insatisfechas, especialmente en aquellos sectores de la población en estado de pobreza. Dicha opinión, parte del principio de *privación relativa*, que según Pérez (1994:77) citando a Gurr, “es una consecuencia de la disparidad entre las expectativas y las realidades, o entre el *deber ser* y el *ser* en la satisfacción de valores colectivos”.

La teoría de la privación relativa si bien nació como respuesta para explicar la acción violenta de ciertos grupos sociales en Norteamérica y en algunos países europeos durante

la década de los sesenta, la misma ha sido rescatada para interpretar en un primer momento las diversas reacciones de violencia social que se desataron en América Latina con la aplicación de los programas de ajuste estructural en los años ochenta, y posteriormente ha sido utilizada implícitamente como razonamiento para elevar a la privación de bienestar y a la frustración de expectativas en los individuos como factores centrales que impulsan la participación social.

Reconociendo como válida sólo la privación relativa para explicar cualquier movilización o participación social se ha caído en el error, tal como señala Paramio (1999: 57), de “que los cambios económicos percibidos como negativos o injustos debían provocar una respuesta social. Es decir, que la percepción del agravio era la única condición necesaria para la acción colectiva”. Lo limitado de tal explicación ha llevado a considerar otros factores como necesarios para que se origine la acción, y que tienen que ver con los recursos con que cuenta la comunidad para la movilización y con la existencia de un espacio político favorable.

1.2. La gestión de los recursos para la participación: los empresarios políticos

Más allá del factor de la privación relativa como mecanismo impulsor de la participación social, una tesis que ha venido siendo revitalizada para explicar la acción conjunta de los individuos es la teoría de la movilización de los recursos. Dicha tesis, sostiene que las posibilidades de acción colectiva van a depender de una serie de recursos externos a los miembros de la comunidad, especialmente aquellos de carácter organizativo, y que son gestionados por las denominadas “industrias de los movimientos sociales” (McCarthy y Zald, 1987; Citado por Pérez, 1994: 91).

Tales industrias, “son organizaciones de diverso tipo que alientan expresiones populares relativamente autónomas (por tanto, independientes del poder) en el terreno político como parte de una lógica de acción propia, o cuando menos capaces de intermediar estas expresiones ante el Estado y el sistema político, de modo de aumentar la ‘rentabilidad’ de la participación” (Tanaka, 1996: 110). En este sentido, “ocupan el ‘puesto de mando’, el lugar crucial del que depende el resultado positivo o negativo de la movilización” (Pérez, 1994: 90).

En apoyo a ciertos sectores sociales, que sus demandas no ingresan al sistema político, las industrias de la movilización otorgan un apalancamiento ideológico y organizativo a la participación de las personas en acciones colectivas. El propósito es aumentar las posibilidades de éxito de la actuación de estos sectores en el ámbito público y reducir los costes que involucra la misma, los cuales son asumidos por los miembros que organizan la acción participativa, quienes son denominados *empresarios políticos*, ya que tienen la función de buscar la rentabilidad de la acción colectiva en términos de beneficios generales para el grupo (Olson, 1992).

El potencial de los animadores o empresarios políticos como agentes promotores de la acción colectiva está medido por la capacidad “para reclutar miembros en las redes de asociaciones voluntarias existentes, a su habilidad para conseguir y manejar recursos, o para utilizar los incentivos individuales con el fin de motivar la participación” (Pérez, 1994: 90). También se da frecuentemente el caso, que frente a la ausencia de pautas autoorganizativas en la comunidad sean los empresarios políticos quienes cuenten con “recursos simbólicos, comunicativos y organizativos nece-

sarios para la movilización, recursos que no proceden normalmente de los miembros del grupo sino que son aportados a éste” (Paramio, 1999: 57), y que permiten al grupo generar consenso en torno a una interpretación de las necesidades que les aquejan con el objetivo de configurar una acción coherente y unívoca.

En la medida que el grupo sea homogéneo, los incentivos con que se cuenta para premiar la acción de los participantes son reconocidos por todos como recompensas, lo cual reduce el coste de tener que buscar otros incentivos fuera del entorno social en el que opera el grupo. Al respecto señala Olson (1985: 44) que, “los animadores políticos que tratan de organizar la acción colectiva tendrán más posibilidades de éxito si se esfuerzan por reunir grupos relativamente homogéneos”.

Según la teoría de la movilización de recursos, la conversión en empresarios políticos de ciertos individuos de la sociedad se produce “por razones de conciencia, es decir de individuos que, al tener resueltos sus problemas vitales básicos, disponen de recursos excedentes en tiempo, dinero y energía para dedicarlos a las actividades del movimiento, aunque no sean beneficiarios directos de los objetivos del mismo” (Pérez, 1994: 90). Esto conlleva a una especie de altruismo por parte de los empresarios políticos que ha sido descrito de la siguiente manera por Olson (1985: 41):

El altruista no obtiene satisfacción en que los demás consigan mejores resultados observables, sino de los sacrificios que él realice en beneficio de los otros. Aunque este último altruismo, participativo, ‘kantiano’, no suele ser la forma acostumbrada de altruismo, creo que se da en la realidad, y ayuda a explicar algunas observaciones de aportación a gru-

pos numerosos. Otra posibilidad adicional es que el altruista esté orientado hacia los resultados, pero desciende los niveles observables del bien público, limitándose a suponer que los sacrificios en su consumo personal aumentan la utilidad que obtienen los demás de un modo que justifica su sacrificio personal.

Una de las organizaciones de la sociedad que tradicionalmente sus “cuadros” han manejado este tipo de altruismo del que nos habla Olson ha sido la Iglesia. El carácter altruista que pueden tener algunas personas pertenecientes a grupos eclesiales de base y a ciertas órdenes de religiosas para organizar la participación de un colectivo sobre un objetivo común es un hecho que se ha venido haciendo cada vez más evidente en América Latina a raíz de deterioro social de grandes segmentos de la población, llegando, inclusive, la misma Iglesia Católica a convertirse en una de las principales denunciadoras de la hegemonía neoliberal, con lo cual ha venido recuperando legitimidad societal (Mallimaci, 2000).

Con ciertas excepciones como la de la Iglesia y algunos líderes comunitarios, hay que tener en cuenta, no obstante, que los empresarios políticos no siempre están guiados por intereses colectivos. Dado que la aparición de estos empresarios es atribuida a condiciones donde están satisfechas las necesidades materiales, generalmente en situaciones donde reina la “hipótesis de la escasez”, o sea la prioridad sobre lo material, dado su oferta relativamente escasa (Inglehart, 1998: 42), los pobres “están insertos en redes de intercambio particularizado con liderazgos clientelares, que les pueden ofrecer ventajas marginales a cambio de su apoyo o de su colaboración pasiva, que a lo más inducen formas segmentadas

de movilización o participación” (Paramio, 1999: 58).

Junto a la gestión de los recursos organizativos y los incentivos, la teoría de la movilización pone el acento sobre las oportunidades que ofrece el sistema político para la participación de los individuos en el ámbito de lo público. Según Pérez (1994), está vertiente de la teoría que encabezaron en los años setenta Chales Tilly y Doug McAdam, subraya que los niveles de apertura o restricción del sistema político condiciona la movilización. Ello significa, que la participación también depende de un contexto político favorable que hace que los costos de la acción sean mínimos y los beneficios sean elevados.

Frente a este importante factor para la participación, los empresarios políticos deben saber identificar las situaciones oportunas en las cuales la actuación ciudadana puede lograr mejores beneficios que si realizara en otra coyuntura menos ideal políticamente. Algunos autores (Weir y Skocpol, 1993), han señalado que situaciones de profunda crisis estatal, como la vivida durante la Gran Depresión, fueron el escenario propicio en muchos países europeos y en Norteamérica para la génesis de amplios movimientos sociales y el desarrollo de un activismo político de la ciudadanía en asuntos públicos que antes no habían despertado interés.

En la misma óptica, pero ahora sobre la base de la crisis de los regímenes militares de corte “burocrático-autoritario” en algunos países de Latinoamérica y del agotamiento del modelo estado-céntrico a partir de los años ochenta, muchos análisis han concebido dicho momento como una oportunidad política, convirtiéndose tal argumento en otra de las tesis que explican el surgimiento de amplias movilizaciones sociales en demanda de rei-

vindicaciones democráticas, de la creación explosiva de ONGs y de la participación ciudadana (Cunill, 1991; Cernea, 1992; Krischke, 1993; Medellín, 1994).

Ahora bien, las teorías de la Elección Racional y de la Movilización de Recursos, tratan de explicar el comportamiento colectivo, pero sustrayendo entre sus argumentos, el papel que juega la cultura en la génesis de la acción social. La omisión de la cultura y de las identidades colectivas como elementos que median en la actuación de los sujetos ha sido la principal crítica y debilidad de dichas teorías, los cuales partiendo de una concepción utilitarista pretenden dar cuenta del por qué de la acción social, cayendo así en un gran reduccionismo.

A pesar de las grandes limitaciones que padecen las teorías de la elección racional, vale reconocer la importancia que pueden tener dichas teorías en el marco de este trabajo para identificar algunas estructuras que pueden incidir en la participación, tales como los recursos organizativos que proveen los empresarios políticos, la existencia de incentivos selectivos y el entorno sociopolítico oportuno para la movilización. En todo caso, lo fundamental es reconocer que tales estructuras si bien son condición necesaria no son suficientes para explicar la acción colectiva, lo que hace volcar la atención sobre el análisis de la cultura como constructora de sentido de la participación social.

2. La cultura: factor determinante de la participación social

Sin negar el aporte de las teorías de la elección racional al señalar la importancia de algunas estructuras para la acción social, la idea de que la cultura disocia (Eder, 1996) es

otra de las argumentaciones que echa a la basura la presunción sobre la existencia de colectivos homogéneos que construyen unas preferencias claras con base a las cuales calculan el beneficio particular que supone una acción (2). La dialéctica de la igualdad y la diferencia a partir de las identidades culturales viene dada en que “la cultura posee solo la función de proporcionar un significado a las orientaciones de la acción. Y, como todos sabemos, es precisamente en torno a los significados en donde la cultura se rompe” (Eder, 1996: 96).

Contra cualquier explicación de raíz parsoniana que ven la cultura como un anclaje de valores ahistorical que orienta una acción de tipo normativa, anteponemos la idea de la cultura como un conjunto de experiencias simbólicas, tradiciones míticas y prácticas rituales, que en palabras de Swidler (1996: 138), sirven como “juego de herramientas (“tool kit”) o repertorio del que los actores seleccionan distintas piezas para construir las líneas de acción”.

Según Swidler (1996: 155), a partir de la selección de elementos culturales de la *caja de herramientas* se crean en una sociedad o grupo, disposiciones de ánimo y motivaciones, formas de organizar la experiencia y evaluar la realidad y maneras de formar vínculos sociales que proporcionan recursos para construir estrategias de acción. En síntesis, la construcción de estrategias de acción significa seleccionar ciertos elementos culturales, lo cual no es otra cosa que parte del proceso de construcción de identidades colectivas (3).

2.1. Las identidades colectivas

El cuestionado constreñimiento de la acción normativa a través de unos roles prede-

finidos, ha dado paso a la aceptación de lo que Castells (1997: 29) llama un proceso de auto-definición e individualización de dichos roles, umbral desde donde se construye el verdadero sentido de la acción. En ello, cumplen una función importante un conjunto de constructos socio-simbólicos que compiten por la hegemonía en la producción de sentido en los individuos, configurando una representación del entorno y por ende una identidad, que los agrega a unos determinados colectivos y los separa de otros.

La expresión efectiva de este planteamiento en la realidad, nos lleva a admitir que el papel de la identidad en la génesis de la participación social es indiscutible. Sin embargo, en medio de un contexto social de fuerte inestabilidad como en el que nos encontramos, caracterizado por grandes crisis y súbitas transformaciones, podemos distinguir que la identidad comparece como razón que puede operar de dos modos diferentes para condicionar la acción, los cuales pueden ser considerados complementarios. El primero, la imprescindible existencia de una identidad definida y consistente para la acción; y el segundo, la búsqueda de una identidad mediante la acción.

El primer modo nos ubica ante la regla de que sin identidades grupales definidas no hay acción colectiva que beneficie al conjunto. Pueden concurrir todas las estructuras propicias para la movilización, tales como recursos organizativos, grupos de apoyo, incentivos, pero si no existe una identidad de grupo es poco probable la participación. En este sentido se pronuncia Tanaka (1996:111) al afirmar que, “los sujetos podrán aprovechar una *estructura de oportunidad política* favorable, o revertir y enfrentar una desfavorable en la medida en que estén en condiciones de actuar colectivamente, y para ello es fundamental... la consistencia de sus identidades grupales”.

Esta perspectiva, sin embargo, nos pone en apuros cuando tropezamos con experiencias de participación en donde persisten débiles identidades colectivas.

Frente a esto último, cobra mayor validez el segundo modo en que puede ser vista la identidad como condicionante. Este nos indica que los individuos pueden construir su identidad, y de hecho lo hacen, a partir de su participación en una acción colectiva. A juicio de Paramio (2000: 75) está “la posibilidad de que existan individuos que al integrarse en una acción colectiva no buscan maximizar una determinada utilidad, más o menos cuantificable, sino que en el mismo hecho de la participación están construyendo sus preferencias y definiendo su utilidad.

Los altos niveles de incertidumbre al que está expuesto el individuo, producto de crisis económicas y sociales hacen que las identidades propias de la modernidad se erosionen y las que surgen tengan una alta volatilidad, generando el hecho de “personas que participan en la acción colectiva para saber qué es lo que quieren, para darse a sí mismos una identidad a partir de la cual podrán decidir sus preferencias y estrategias futuras” (Paramio, 2000: 75).

La necesidad de las personas de tener una autoidentificación de quiénes son y de lo que hacen, lleva a que la búsqueda de identidad se convierta en un incentivo selectivo para la participación en una actividad, independientemente de que esté sea muy particularista y esté orientada a la satisfacción de necesidades y aspiraciones locales. Es este momento, donde entran en juego los empresarios políticos quienes “ponen en marcha procesos de creación o fortalecimiento de identidades colectivas” (Paramio, 2000: 78).

Los empresarios políticos ayudan en la construcción de identidades colectivas a tra-

vés de la dirección del proceso de selección de los elementos culturales del ya mencionado *juego de herramientas*. Ellos seleccionan constructos simbólicos para lograr integración colectiva, apelando a recursos comunicativos y organizativos que generen sentimientos de identificación con una actividad o “causa” y así mismo la adscripción de las personas al agregado colectivo que representa y lucha por esa causa.

Vemos así, como la capacidad de construcción o reforzamiento de identidades colectivas para la participación social va depender de los recursos organizativos, que como mencionáramos anteriormente, eran aquellos planteados por la teoría de la movilización de los recursos. En rigor, ello se explica, en palabras de Tanaka (1996: 111), porque “se logra más articulación en la medida que se haya pasado por procesos de organización, donde son claves los ‘empresarios políticos’, así como, naturalmente el surgimiento de liderazgos sociales desde abajo y la constitución de redes sociales”.

En comunidades donde dicha capacidad organizativa ha sido un rasgo tradicional distintivo y la presencia de empresarios políticos con intereses colectivos es usual, se ha venido afirmando en los últimos años que estos lugares cuentan con un activo acumulado muy valioso que presenta un carácter latente y ejerce una influencia significativa en el desarrollo vertiginoso de la participación social, nos estamos refiriendo al llamado *capital social*.

2.2. El capital social

Una tesis que trata de superar los defectos de la *lógica de la acción colectiva* es la teoría del Capital Social. Para este cuerpo de ideas, su principal axioma es que las instituciones cuentan en la definición del comportamiento de los individuos más allá del mero

cálculo racional, el cual introduce el problema del *free rider* (4). En vista de ello, estas ideas “restan énfasis a las metáforas de la elección y de los resultados distributivos a favor de otras lógicas de la acción y de la centralidad de los significados y de la acción simbólica” (March y Olsen, 1993: 13).

La teoría del Capital social tiene sus raíces en el llamado ‘nuevo institucionalismo’, el cual reconoce a las instituciones “como un conjunto de pautas de actividad supraorganizativas mediante las cuales los seres humanos rigen su vida material en el espacio y en el tiempo, y como un conjunto de sistemas simbólicos de los que se sirven para categorizar esa actividad y dotarla de significado” (Friedland y Alford, 1993: 156).

El trabajo pionero sobre “capital social” lo desarrolla Putnam (1993), mediante el estudio de los factores que incidieron en las diferencias de desarrollo entre la Italia del Norte e Italia del Sur. Según este autor, “el capital social refiere a las características de la organización social, tales como la confianza, las normas y las redes de trabajo que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas” (1993: 167).

El legado de una comunidad cívica desde los tiempos del medioevo, con capacidad para autoorganizarse y actuar cooperativamente, se estableció en el tejido social como un esquema de valores y pautas de ordenación compartidas, que mediaron decididamente en el desarrollo de las comunidades de Italia del Norte. El principio fundamental que se deduce de la tesis de Putnam es que aquellas sociedades que cuenten con acervo cultural e institucional favorable tienen mayores posibilidades de desarrollarse político, económico y socialmente.

La tesis de Putnam ha sido convalidada últimamente por Inglehart (1998), quien sos-

tiene que la existencia de redes organizativas de carácter voluntario y la confianza societal son *variables adicionales* que han incidido en el desarrollo económico y la estabilidad de la democracia en muchas naciones. A partir de un impresionante estudio comparativo que toma como muestra a 43 países, este autor señala que la presencia de variables culturales como la motivación para el logro, valores posmaterialistas y factores de capital social como la pertenencia a asociaciones son complementarios de las variables económicas para, entre ambas, producir desarrollo.

Aunque Inglehart afirma en su trabajo que sus resultados no son muy representativos de los países latinoamericanos, los cuales presentan más bien una condición media o nula de estos rasgos, otros autores como Klitsberg (1999) han señalado la presencia en América Latina de ciertas experiencias exitosas de democratización y desarrollo económico a nivel local, en donde el capital social ha jugado un papel importante para el impulso de la participación.

El énfasis en la tradición y la experiencia organizativa de la comunidad como condicionante de la participación, tal como lo plantea la tesis del capital social, nos lleva nuevamente a retomar la mencionada idea del juego de herramientas como dispositivo para desplegar estrategias de acción. Es este sentido, conseguimos otro punto de encuentro entre las diversas posiciones que han tratado de explicar la acción colectiva, las cuales cada una por su lado observan grandes limitaciones para obtener un óptimo nivel comprensivo.

Recordado brevemente, el juego de herramientas nos habla de experiencias y tradiciones simbólicas de las que hacen uso los individuos para construir líneas de acción. Ello se relaciona con el capital social, a través de

que el mismo se comporta como un bagaje cultural al que se recurre dentro del conjunto de elementos culturales que contiene el *tool kit* para emular y desarrollar prácticas y acciones colectivas que han tenido un efecto positivo en anteriores situaciones históricas en la vida de la comunidad.

Al respecto, Paramio (1999: 6) señala que,

se presupone que los actores sólo contemplan normalmente estrategias ya ensayadas en el pasado o aplicadas por otros actores en circunstancias análogas, que su capacidad de innovación estratégica es consecuencia no planeada de respuesta ad hoc ante resultados anómalos de sus estrategias usuales, y que la mayor parte de la innovación política es más resultado del recambio en los grupos dirigentes que del aprendizaje propiamente dicho.

El tipo de explicación histórica que da este autor a la innovación estratégica y al papel de los cambios de dirigencia en la modificación de la acción colectiva nos pone sobre el tapete dos cuestiones que también fueron mencionadas anteriormente. La primera, tiene que ver con la existencia o no de una oportunidad política favorable para la participación. Los individuos modificarán sus estrategias usuales de acción dependiendo de que las mismas den o no resultado frente al espacio político que se les presenta. La segunda, refiere a que el cambio de líderes, entendidos en este caso como empresarios políticos, llevan a una innovación política, que puede involucrar nuevas estrategias de acción que anteriormente no eran contempladas (5).

Con lo dicho hasta aquí, queda evidenciado que el camino recorrido a lo largo de es-

tas dos secciones de razonamiento teórico tienen en todo momento la intención de hacer un esfuerzo en poner al descubierto el complejo entramado de factores que condicionan la participación social y que ahora se tratará de identificar lo mejor posible a la luz de un análisis comparado de dos comunidades que están insertas en el subprograma de Medicina Natural que promociona la Iglesia Católica en el Municipio San Francisco del Estado Zulia.

3. Una política social de la Iglesia: El subprograma de medicina natural

A partir del Concilio Vaticano II y de las conferencias episcopales de Medellín en 1968, Puebla en 1979 y Santo Domingo en 1992, la Iglesia Católica en América Latina ha dado un giro a su concepción asistencialista en lo social. Mediante su inserción en comunidades de escasos recursos, la Iglesia Católica en los últimos años ha formulado y ejecutado políticas sociales canalizadas a través de los Secretariados de Pastoral Social, planteando así programas en las áreas de salud, educación y cultura que han promovido la participación social.

Con la creación de organizaciones no gubernamentales, entre las que destaca Cáritas Internacional, la Iglesia Católica comienza a jugar un papel importante, promoviendo y desarrollando esfuerzos colectivos, creando sistemas económicos que han estimulado fórmulas autogestionarias donde las comunidades buscan su propio bienestar, ofreciéndoles herramientas en los ámbitos de educación, organización civil, derechos humanos y educación de la fe; en el área de la salud con los dispensarios, curso de alimentación sana, primeros auxilios, comité de salud, boticas comunitarias, medicina preventiva y medicina natu-

ral, estableciendo así diversas y creativas respuestas a la amplia gama de situaciones problemáticas que atañen al individuo en su contexto social, dejando claro que no existe una receta específica para combatir los problemas que se presentan en la realidad (6).

Bajo esta óptica se inicia en marzo de 1995 el Secretariado de Pastoral Social (SE-PAS) de la Arquidiócesis de Maracaibo, el cual ha desarrollado una serie de programas sociales a través de las coordinaciones de Salud, Infancia, Educación para el Trabajo, Indígena, Derechos Humanos y Economía Solidaria, aplicados en los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Páez, Machiques y Catatumbo del Estado Zulia, respaldados por el financiamiento de fuentes internacionales como el Banco Mundial y Cáritas de Suecia.

En el área de salud, el SEPAS cuenta con los programas de Salud Institucional y Salud Comunitaria. De este último programa se deriva el Subprograma de Medicina Natural, con el cual en diversas comunidades se propicia la intervención y participación de sus propios miembros desde el momento del análisis de su realidad concreta, incluyendo la investigación e intercambio de experiencias, estrategias y conocimientos que posibilitan la obtención de óptimos resultados en el proceso de elaboración de medicinas naturales con los elementos curativos que poseen ciertas plantas medicinales, constituyéndose en una alternativa actual frente al alto costo de los fármacos convencionales y sensibilizando a los miembros de las comunidades en relación al derecho que tienen a la salud.

Entre las comunidades donde se ha llevado cabo este subprograma se encuentran los barrios populares Betilio González y 24 de Julio del municipio San Francisco, en los cuales se han creado espacios propios para el procesamiento y comercialización de productos

medicinales a base de plantas silvestres y en los que participan vecinos de las respectivas comunidades. Veamos en cada caso que factores han incido en ese resultado.

3.1. El barrio Betulio González: una botica comunitaria

El inicio en 1996 del subprograma de medicina natural en el barrio Betulio González tuvo como epicentro la Escuela Arquidiocesana Padre Cueto, en donde un grupo de maestros instó a los padres y representantes de los alumnos a participar en una serie de actividades sociales (7), que como política de extensión dirigida a la integración comunidad-escuela ha tenido el objetivo de ayudar en la solución de algunos problemas comunes de las familias del sector.

El avance del subprograma a lo largo del tiempo se ha debido a la preocupación de una maestra titulada en agronomía, quien conjuntamente con un grupo de amas de casas y madres de los alumnos lograron fundar una especie de laboratorio-botica, donde se produce y expende a la comunidad medicinas homeópatas a bajo costo, provenientes del cultivo y procesamiento de plantas silvestres medicinales, tales como la sábila, el jengibre y el eucalipto.

En este caso, un primer factor que se evidencia en la génesis y desarrollo del subprograma es la presencia de *recursos organizativos externos* a la comunidad, tales como la actuación promotora de la escuela arquidiocesana, la cual a través de convocatorias y charlas sobre técnicas alternativas de curación de enfermedades logró congregar a un grupo de vecinos del sector en torno a las bondades de la medicina natural, e igualmente gestionó la concesión ante la Arquidiócesis de Maracaibo del espacio donde hoy en día funciona la botica.

Asimismo, es necesario señalar el papel que ha desempeñado la maestra-agronóma, quien gracias a sus conocimientos científicos sobre el tratamiento de los suelos, la flora y la siembra, ha instruido a algunos de los miembros del grupo para el mejoramiento de la cosecha de las plantas medicinales y también para el desarrollo de huertos familiares, que viene siendo otro de los componentes del subprograma de medicina natural. El trabajo desinteresado de esta maestra en pro de la comunidad, y su consecuente compromiso en la coordinación de las actividades del laboratorio-botica sin recibir ningún tipo de remuneración económica, sino más bien expresando un esfuerzo personal a partir del cual se incrementan los beneficios que obtiene la comunidad, hace que dicha maestra pueda ser considerada como un *empresario político*.

Por otra parte, algo interesante que merece ser resaltado, es que el subprograma ha contado desde sus inicios principalmente con la participación de personas del sexo femenino (8), lo cual reitera el papel jugado por la mujer en el desarrollo de estrategias no convencionales de satisfacción de necesidades y sobrevivencia. En el caso particular del procesamiento de plantas medicinales, el papel de la mujer también posee una explicación que tiene sus raíces en rasgos intrínsecos al mismo género femenino y que ha sido conocido como el *ecofeminismo*, donde la historia oral ha permitido entre las mujeres la trasmisión de conocimientos de generación en generación acerca del efecto curativo de las hierbas (Parentelli, 1995: 179).

Dicha tradición, que forma parte de ese *juego de herramientas* que es la cultura, se combina en este caso con la percepción colectiva de las madres sobre el problema de las afecciones respiratorias y de la parasitosis en los niños de la comunidad, para incidir como

factores que condicionan la participación de las mujeres en el subprograma de medicina natural, en donde las mismas reafirman su *identidad* femenina a través de una actividad que consideran propia de su género, y que en momentos de *privación relativa*, evidenciada por un deterioro de los servicios públicos de salud y por el alto costo de los fármacos convencionales, se constituye en una alternativa válida, siendo esto último la base del *cálculo racional* y la reafirmación de la identidad el *incentivo selectivo*.

En este sentido, la presencia de un *cálculo racional* anticipado para la participación en el subprograma es muy clara, el cual está dado sobre el beneficio grupal que ofrece producir medicinas naturales frente a lo costoso de los fármacos convencionales, y como lo muestra el análisis de las entrevistas deriva, de una representación colectiva que la comunidad tiene sobre los beneficios de la medicina natural, siendo esto una de las razones por las cuales este subprograma ha contado con más participación y apoyo en comparación con los otros proyectos de la escuela.

A pesar de esa representación colectiva de los hombres y las mujeres de la comunidad Betulio González hacia los beneficios de la medicina natural, y que abarca tanto a vecinos que participan como aquellos que no participan en el subprograma, es evidente que a lo interno del grupo que participa opera como *incentivo selectivo* el hecho de que dicho subprograma se ha convertido en un espacio para que las mujeres reafirman su identidad en torno a descubrir o confirmar que están llamadas a cumplir, más allá de cuidadoras del hogar, un papel muy importante en la lucha para superar las grandes limitaciones que impone el actual estado de *privación relativa*.

3.2. El barrio 24 de Julio: Una casa comunitaria naturista

La organización de algunos miembros de esta comunidad en torno al subprograma de medicina natural que empezó a promocionar el SEPAS en 1995, tiene sus antecedentes en los llamados desayunos comunitarios que realizaba a comienzos de la década de los noventa una escuela de Fe y Alegría llamada Nueva América, los cuales como parte de una política de esta ONG buscaban combatir los niveles de desnutrición, principalmente de los niños que asistían a esta escuela de la zona.

Otras de las experiencias comunales previas al subprograma fue un círculo femenino de prevención, grupo formado por mujeres de la comunidad que se dio a la tarea de difundir recomendaciones y normas de higiene para el hogar que permitieran reducir los casos de diarrea y enfermedades de la piel en los niños, producto de la escasez de agua potable en el sector. En este sentido vemos, al igual que el caso Betulio González, como se ratifica una vez más el papel determinante de la mujer en el desarrollo de estrategias y actividades que implican asociacionismo, hecho común en varios lugares de América Latina, donde las mujeres “se organizan solas o en compañía de sus vecinas o de sus amigas, quienes tienen similares necesidades..., uniéndose para crear y hacer funcionar organizaciones horizontales que ataquen los problemas propios y de los de sus hijos” (Parentelli, 1995: 177).

La existencia de dichas experiencias asociativas en el barrio 24 de Julio fue un factor que catalizó el desarrollo del subprograma de medicina natural a su llegada en 1995, ya que se contaba en la comunidad con cierto grado de organización, el cual había sido ges-

tionado desde hace tiempo atrás por una líder comunal con presencia en el barrio desde su fundación, que a través de su carisma y capacidad de movilización logró reunir a un grupo de madres en torno a acciones colectivas, tales como el círculo femenino de salud preventiva y la integración de este grupo a los desayunos comunitarios de Fe y Alegría.

El nivel de asociacionismo registrado en esta comunidad, nos lleva a otorgarle importancia a la trayectoria histórica de organización del barrio, que como *capital social* ha mediado en el vertiginoso desarrollo del subprograma de medicina natural. Dicho acervo cultural se hizo patente en el esfuerzo mancomunado de vecinos, del SEPAS y de los grupos eclesiales de base en la progresiva edificación de una casa comunitaria, donde funcionan el referido subprograma y otras iniciativas colectivas que tratan de dar respuesta a las innumerables necesidades del barrio.

En una de las entrevistas realizadas a una de las personas que participan en el subprograma, y que solamente cuenta con formación escolar básica pero con una gran experiencia comunal, llamó la atención el hecho de haber enfatizado al punto de teorizar, como la historia de la fundación de los barrios incide en la organización y participación de la gente. A su juicio "...la manera de consolidación de cada barrio influye mucho en la facilidad para organizar o no organizar el barrio..." (Entrevista No. 6, 2000) (9). Ello guarda relación con el proceso de construcción de representaciones sociales y de un imaginario colectivo del barrio que nos habla de su singularidad e idiosincrasia.

La regla de que "todo se ha conseguido es juntándose, peleando y organizándose" en un contexto social percibido como de *privación relativa* ha logrado cimentar una *identidad colectiva* fundada en la representación

simbólica positiva de la lucha mancomunada, la cual como parte de aquel *juego de herramientas* del que hablábamos en el segundo apartado, es una de las piezas del repertorio simbólico a partir del cual la comunidad ha construido líneas de acción basadas en estrategias ya ensayadas en el pasado, donde las mismas muchas veces ya son consideradas una práctica ritual y forman parte de una filosofía de vida.

La consistencia de dicha identidad grupal en el caso del subprograma ha sido sustentada entre otras razones por la *oportunidad política* que a nivel micro ha potenciado el SEPAS, mediante la promoción de un esquema autogestionario de salud comunitaria que favorece un contexto de apertura para la acción colectiva de los miembros del barrio, lo cual combinado con la presencia de grupos eclesiales de base que actúan como *empresarios políticos* en términos de asumir los mayores costos que implica la movilización del grupo para que el subprograma tenga éxito, ha logrado mantener la representación social positiva que se tiene de la estrategia participativa y ha evidenciado que la acción colectiva reporta más beneficios que costos para los que participan, que resulta de calcular racionalmente el esfuerzo participativo en la elaboración de un producto tan económico y beneficioso como la medicina natural si se le compara con lo costoso económicamente de los fármacos convencionales.

Cuando nos referimos a que el SEPAS contribuye a favorecer el desarrollo de un contexto de oportunidad política, estamos hablando de cómo esta Secretaría mediante una política social determinada ofrece un esquema de ventajas (recursos financieros, talleres de formación, intermediación ante los organismos públicos) que convierte a la misma política en una oportunidad para la participación de la co-

munidad, donde, desde el punto de vista de la *elección racional*, los beneficios superan con creces a los costos que implica la acción.

A la par del SEPAS como empresa de la participación social, está el caso de los grupos eclesiales de base, impulsados por las Hermanas de la Congregación Angel de la Guarda, quienes vistas como *empresarios políticos* han sido pilares en el desarrollo del subprograma de medicina natural, al punto que se dedican a tiempo completo a los trabajos de procesamiento de las plantas medicinales, a la formación de los miembros del subprograma y a la realización de talleres dirigidos a la comunidad; en pocas palabras, son quienes asumen la mayor carga de labores, dada su vocación de servicio por su condición de religiosas, hecho que registra aquel altruismo del que nos habla Olson, característico del empresario político.

4. Conclusiones

En el hecho que la gente participe en pro de lograr objetivos colectivos operan una serie de factores tanto internos como externos al mismo sujeto. En estos tiempos de grandes restricciones económicas, una de las tesis que más ha ganado terreno para explicar la participación tienen que ver con la frustración de expectativas que produce la situación de agravio social, generada por la profunda crisis del aparato asistencial del Estado y por los posteriores ajustes ortodoxos y heterodoxos que en materia de economía se han ensayado con el fin de conjurarla.

Más allá de lo valido de dicha posición, adentrandonos en el estudio de dos comunidades muy específicas que han sido blanco de una política social de la Iglesia Católica, se pudo constatar como la participación de los vecinos en ambos casos obedece a factores

que rebasan los límites explicativos de la tesis de la frustración de expectativas y de agravio social, tales como la presencia de grupos de apoyo externos a la comunidad, que han servido como empresarios políticos, en términos de promotores de la participación social al brindar los recursos organizativos necesarios para la acción, lo cual se evidencia en la comunidad Betilio González en la actuación de la escuela como promotora del subprograma y el papel desempeñado por la maestra-agronóma como agente organizador; y en el caso de la comunidad 24 de Julio, mediante los trabajos de formación de los grupos eclesiales, donde un grupo de religiosas emplazadas en la zona asumen a tiempo completo las tareas que hacen posible el desarrollo del subprograma.

Otro de los factores que condicionan la participación y que es común en ambas comunidades, es el referido al cálculo racional que subyace en las personas que participan en el subprograma, y que resulta de evaluar un escenario caracterizado por afecciones respiratorias, intestinales y dérmicas en los niños y un escaso poder adquisitivo frente al costo que representan los fármacos convencionales y a la ausencia de medicinas en los centros públicos de salud, llevando a considerar a la medicina natural como una alternativa, y por ende al subprograma como una respuesta que puede resolver una de las necesidades que es reconocida por el imaginario colectivo como apremiante.

La vinculación del subprograma a las dos escuelas que se encuentran en estas comunidades ha sido la correa de transmisión que ha conducido a muchas madres de los alumnos a interesarse por el subprograma, y en donde el hecho que solo sean mujeres las que participen nos lleva en ambos casos a identificar como incentivo selectivo que promueve la acción del grupo la reafirmación de la identi-

dad femenina a partir una tradición propia de este generó como lo es el saber curativos de las hierbas. Sin embargo, ello no significa que el círculo identitario haya cerrado la posibilidades de acceso a los hombres, sino que se hace necesario establecer otros incentivos que sean reconocidos por los hombres para viabilizar la participación de personas de este género en el subprograma, o también de aquellas mujeres que no reconocen como atractivo el actual incentivo que se maneja a lo interno del grupo.

Dentro de los factores registrados, existe un factor que sólo encontramos presente en uno de los casos y que ha tenido un impacto significativo en términos de los logros alcanzados, ha sido el relacionado a la experiencia participativa de la comunidad. En cuanto a la incidencia de este factor en la comunidad 24 de Julio se pudo observar que el mismo ha materializado los objetivos del subprograma de una manera más significativa, ya que hasta se cuenta con un médico naturista que realiza consultas y prescribe los medicamentos homeopáticos respectivos. A diferencia de la comunidad Betilio González, donde no se encontró rastro alguno de trayectoria participativa antes de la llegada del subprograma, la comunidad 24 de Julio cuenta con mejores niveles de organización y participación, que hace posible esperar mayor grado de sustentabilidad del subprograma en el tiempo una vez que se retiren los apoyos brindados por el SEPAS.

El apoyo otorgado por el SEPAS ha posibilitado en el caso de Betilio González reunir consenso en torno a una representación social del problema de la salud en la zona, generando una percepción positiva sobre el subprograma de medicina natural, y donde la participación de las mujeres ha estado guiada por

la reafirmación de su identidad, lo que descarta lo religioso como vector de dicho proceso, sino más bien atendiendo a la cuestión del género tal como ya lo habíamos mencionado. Esto a la larga y dependiendo de los logros del subprograma y de otros proyectos que maneja la escuela arquidiocesana puede abrir espacio para la constitución de una identidad colectiva firme basada en el asociacionismo y que englobe no solo al género femenino.

En cuanto al caso 24 de Julio, más allá de la identidad de género que se maneja a lo interno del subprograma, hay que recalcar que está comunidad, dada su trayectoria participativa tiene además una identidad consistente en torno a la noción de la lucha mancomunada que la hace más firme organizativamente que la comunidad Betilio González. No obstante, ello no significa que esté descartada la posibilidad de que se erosione dicha identidad, dado el entorno de alta incertidumbre y crisis que hay en la actualidad, donde el repliegue a lo privado y el individualismo hacen mella sobre cualquier acción que tenga un objetivo colectivo.

Notas

1. El Programa de Salud Comunitaria que adelanta el SEPAS alcanza a más de un veintena de comunidades pobres urbanas y rurales del Estado Zulia, que incluye además a las etnias wayúu, barí y yukpas. Ver al respecto Rodríguez, Isabel y Pérez, Jorge (2000). “Descentralización, Iglesia y salud en la década de los 90: el caso del Estado Zulia, Venezuela”. En: **Ciencias de Gobierno**. No. 7. Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Maracaibo. Pp. 41-62.
2. La teoría de la elección racional en el mejor estilo Olsoniano sostiene la idea que los individuos poseen identidades fijas a

- partir de las cuales determinan jerárquicamente sus preferencias y buscan maximizar su satisfacción.
3. A pesar de lo acertado del planteamiento de Swidler, consideramos que el mismo es incompleto, ya que no menciona en ninguna parte que factores median en ese proceso de selección de elementos culturales, el cual a nuestro parecer está determinado por situaciones de coacción y dirección en una socialización donde se hacen presentes la disputa, la resistencia, el consenso y la recreación cultural.
 4. El problema del free rider o “polizón” puede ser traducido como el individuo que no participa en la acción colectiva pero que igualmente se beneficia en forma gratuita de los resultados logrados con la misma. Ello se debe supuestamente a que este individuo sabe que existe un significativo número de personas que participan y asumirán los costos de la acción y de todas formas los beneficios serán para todos sin distinción. Es a fin de resolver este problema que Olson plantea la estrategia de los incentivos selectivos.
 5. La pérdida de credibilidad de ciertos dirigentes por actos dolosos, que han establecido un intercambio clientelar con la población, ha servido de escenario para que surjan nuevos líderes que promocionan un tipo de relación cívica y democrática con la comunidad, lo cual propicia un cambio en las tradicionales formas de actuación colectiva que antes tenían con aquellos de corte clientelar.
 6. En el Estado Zulia encontramos un gran número de ejemplos en donde la Iglesia Católica trata de impulsar el desarrollo de las comunidades. Entre ellos se cuentan, el caso de la Hermanas Oblatas en la parroquia El Manzanillo, quienes llevan adelante un programa de educación para el trabajo del Instituto Venezolano de Capacitación Profesional de la Iglesia (IVE-CAPI). En el caso de la defensa de los derechos humanos, la Iglesia, a través de su Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, mantiene en el Barrio el Gaitero una presencia vigilante sobre situaciones de maltrato y violencia de la que pueden estar sujetos aquellos grupos más vulnerables como las mujeres, niños e indígenas. Por otro lado, encontramos en los Dispensarios de Cañada Honda, Santa Ines y Los Pescadores en Santa Rosa de Agua, el trabajo social de las Siervas de la Madre de Dios, de las Damas Salesianas, de las Hermanas Rosminianas y de las Hermanas Carmelitas. En cuanto a la educación de la fe, tenemos a los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, quienes con el Padre Jaime Kelly a la cabeza, mediante programa televisivos y radiales, ofrecen un mensaje de esperanza, que coadyuve al fortalecimiento de la moral de las personas en estos momentos de grandes restricciones económicas.
 7. Entre las acciones que ha llevado adelante la escuela arquidiocesana en el marco de la política social del SEPAS se encuentran también el proyecto de Higiene Escolar y el de Educación para el Trabajo.
 8. Una de las raíces iniciales de esta situación estuvo en el hecho de que son en gran medida mujeres las representantes de los alumnos, lo cual ligado a la vinculación que desde un principio ha tenido el subprograma a la escuela, ha servido como correa de transmisión que ha llevado a muchas madres de los alumnos a participar.
 9. Por razones ligadas a la confidencialidad de los entrevistados se omite revelar el nombre de los mismos. En todo caso, las

entrevistas realizadas reposan en manos de los investigadores y están a disposición de quien las solicite para cualquier consulta.

Bibliografía citada

- Castells, Manuel (1997). **La era de la información: Economía, sociedad y cultura.** Vol. 2. "El poder de la Identidad". Editorial Alianza. Madrid. Pp. 495.
- Cernea, Michael (1992). "Organizaciones no gubernamentales y desarrollo local". **Provisión de servicios públicos a través de medios privados.** Documentos Clave. Vol. 9. No.1. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Caracas. Venezuela. Pp. 7-37.
- Cunill, Nuria (1991). **Participación ciudadana.** Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Caracas. Venezuela. Pp. 262
- Downs, Anthony (1973). **Teoría económica del democracia.** Editorial Aguilar. Madrid. España.
- Eder, Klaus (1996). "La paradoja de la cultura. Más allá de una teoría de la cultura como factor consensual". **Zona Abierta.** No. 77/78. Madrid. España. Pp. 95-126.
- Friedland, Roger y Alford, Robert (1993). "La sociedad regresa al primer plano: símbolos, prácticas y contradicciones institucionales". **Zona Abierta.** No. 63/64. Madrid. España. Pp. 155-207.
- García, José (1999). "El papel de las identidades culturales en la rearticulación Estado-sociedad civil en América Latina". En **Revista Venezolana de Ciencias Sociales.** Vol. 3. No. 3. Junio. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas. Venezuela. Pp. 46-68.
- Inglehart, Ronald (1998). **Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades.** Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Madrid. España. Pp. 573.
- Klisksberg, Bernardo (1999). "El rol del capital social y de la cultura en el proceso de desarrollo". **Revista Venezolana de Gérencia.** Año 4. No. 9. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. Pp. 11-50.
- Krischke, Paulo (1993). "Actores sociales y consolidación democrática en América Latina: Estrategias Identidades y Cultura Cívica". **Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología.** Año 3. No 6 y 7. Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela. Pp. 1-25.
- Mallimaci, Fortunato (2000). "Catolicismo en sectores populares ante el quiebre del estado de bienestar". **Revista de Ciencias Sociales.** Vol. VI. No. 1. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. Pp. 115-130.
- March, James y Olsen, Johan (1993). "El Nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida política". **Zona Abierta.** No. 63/64. Madrid. España. Pp. 1-43.
- Medellín, Pedro (1994). "La modernización del Estado en América Latina: entre la reestructuración y el reformismo. **Reforma y Democracia.** No. 2. CLAD. Caracas. Venezuela.
- Olson, Mancur (1992). **La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos.** Editorial Limusa. México. Pp. 199.
- Olson, Mancur (1985). **Auge y decadencia de las naciones.** Editorial Ariel. Barcelona. España.
- Paramio, Ludolfo (1999). "Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina". **Zona Abierta.** No. 88/89. Madrid. España. Pp. 5-74.

- Paramio, Ludolfo (2000). “Decisión racional y acción colectiva”. **Leviatán**. No. 79. II Época. Primavera. Madrid. España. Pp. 65-83.
- Parentelli, Gladys (1995). “Mujeres de sectores populares y ética ecofeminista en América Latina”. **Frónesis**. Vol. 2, No. Revista del Instituto de Filosofía del Derecho. La Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. Pp. 171-188.
- Pérez, Manuel (1994). “Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)”. **Zona Abierta**. No. 69. Madrid. España. Pp. 51-120.
- Putnam, Robert (1993). **Making democracy work: civic traditions in Modern Italy**. Princeton University Press. Princeton. New Jersey.
- Swidler, Ann (1996). “La cultura en acción: símbolos y estrategias”. **Zona Abierta**. No. 77/78. Madrid. España. Pp. 127-162.
- Tanaka, Martín (1996). “La participación política de los sectores populares en América Latina: Algunas conclusiones comparativas sobre la consolidación democrática”. **Debates en Sociología**. No. 20-21. Universidad Católica del Perú. Lima. Pp. 105-128.
- Trigo, Pedro (1997). “La iglesia venezolana en la democracia” **Revista SIC**. No. 600. Año LX. Publicación del Centro Gumilla. Caracas. Venezuela. Pp. 572-580.
- Weir, Margaret y Skocpol, Theda (1993). “Las estructuras del Estado: una respuesta keynesiana a la Gran Depresión. **Zona Abierta**. No. 63/64. Madrid. España. Pp. 73-153.
- Zapata, Roberto (1996). **Valores del venezolano**. Ediciones Conciencia 21. Caracas. Venezuela. Pp. 217.